



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 7049/2021

AUTOS: “CORPHONE S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I. Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación de fecha 8 de septiembre de 2021 contra la Resolución que desestimó el tratamiento del recurso de impugnación por haber sido presentado una vez vencido el plazo previsto por normativa aplicable y no haber acompañado la documentación que justifique la representación invocada.

Que más allá del giro de las actuaciones al área pertinente a efectos de proseguir el con el trámite de cobro, ante la presentación judicial, el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago de la totalidad del importe discutido, en los términos del art. 15 de la ley 18.820.

Que al respecto, la aquí accionante, en su escrito recursivo, plantea la imposibilidad de afrontar el ingreso y deduce la inconstitucionalidad de la exigencia del “solve et repete”.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en ese contexto la recurrente denuncia su situación concursal y traba de embargo por un monto superior al cobro perseguido en autos, acreditando así -a priori- la imposibilidad de dar cumplimiento al depósito previo impuesto por el legislador para habilitar la instancia judicial con el objeto de analizar la procedencia o no de los montos que el organismo administrativo le reclama.

II. Que no ha de pasar inadvertido que en fecha 22 de septiembre de 2022, el representante legal de la AFIP, acompaña los IF-2022-01672740 y F.1003, que ~~darían cuenta del acogimiento al plan de facilidades dispuesto por ley 27653.~~

Fecha de firma: 27/04/2023

Alta en sistema: 09/05/2023

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#35514070#366328979#20230425155037151



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

Que corrido el traslado, se presenta el representante de la actora y manifiesta que tal inclusión se debió a un grave error material e involuntario de parte del contador que asesoraba a la empresa y que el día 06/05/2022, la empresa realizó ante AFIP la presentación N° 202200563929, bajo el trámite denominado “Planes de Pago - Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras”. En dicha presentación se hizo saber expresamente al organismo fiscal nacional, la voluntad de dejar sin efecto (anular) el Plan de Pagos generado. Lo cual más allá de la existencia la inclusión original, pone en evidencia la voluntad de continuar la controversia sin aceptar el allanamiento incondicional que impone como requisito esencial la condonación dispuesta por la citada norma.

III. A partir de la verificación de crédito originada en la notificación del inicio de concurso preventivo. El organismo detecta varias diferencias en las presentaciones de las declaraciones juradas en las que los montos denunciados no se ajustan a los ingresos que corresponden a la actividad, existencia de personal no registrado, etc.. Se labra acta y se notifica el 9/4/19 para su regularización.

Ante la falta de respuesta por parte del empleador, el 30/6/19 se labra acta de infracción que es notificada a las 0 hs de ese día.

El 30/7/19 se presenta escrito de impugnación que en primer lugar plantea la nulidad de la notificación al domicilio fiscal electrónico en virtud de la facultad que le habría conferido la ley 27430 a la AFIP para la utilización de este medio.

Agrega que el plazo de impugnación no es fatal y la presentación es válida hasta el dictado del acto administrativo.

Abordado el tratamiento el organismo rechaza el trámite de denuncia de ilegitimidad no sólo por el requisito de temporalidad exigido, sino también por cuanto no dio cabal cumplimiento con la presentación de documentación que acredite la personería en tanto sólo acompañó copia de escritura de un poder especial que debió estar certificada o acreditarla mediante los formularios de AFIP creados a tal efecto.

Que en orden a las cuestiones planteadas ha de advertirse que de conformidad a lo reglado por la RG 79/98, el art. 4.1.2. exige: “Acreditación de la personería. Haber dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72, texto ordenado en 1991, en el mismo acto de la presentación del escrito impugnatorio, acompañando la documentación que acredite la personería invocada.”.

Sin embargo ante su incumplimiento, debió actuar de conformidad a lo previsto por el art. 4.3.2 que expresamente obliga a la AFIP a “intimar a la acreditación de la personería, en los términos de los artículos 31 a 33 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72, texto ordenado en 1991, bajo apercibimiento de declarar desierta la impugnación, salvo que del legajo del contribuyente surja que el firmante del escrito impugnatorio reviste el carácter de titular o representante legal del recurrente.”.

Es la propia resolución que detalla el procedimiento a seguir y en caso de falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos formales detallados en el punto 4.1, *“el área competente en esta instancia del proceso dispondrá, en la primera providencia que emita, todas las intimaciones que correspondiera efectuar.”*.

Que por el contrario, en la nota externa 143 del 25 de septiembre del 2020 suscrita por el Jefe de la División de Recursos, no se advierte que se haya dado curso a la regla prevista y dispuso el rechazo in limine del escrito impugnatorio.

Que por ello, sin que importe emitir opinión alguna sobre los aspectos vinculados a la determinación del cargo, a fin de garantizar el cumplimiento de las garantías adjetivas y subjetivas que enmarcan el proceso administrativo, corresponde hacer aplicación estricta de las reglas indicadas y devolver los presentes obrados al organismo de origen a fin que, previa intimación en los términos del art. 4.3.2., evalúe si corresponde tomar la impugnación presentada extemporáneamente como denuncia de ilegitimidad y sustanciarla de acuerdo con lo previsto en el apartado 6) del inciso e) del artículo 1° de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones tal como lo indica el art. 4.3.1 de la RG 79/98.

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE:** 1) Declarar formalmente inadmisibles los recursos interpuestos; 2) hacer aplicación estricta de las reglas indicadas y devolver los presentes obrados al organismo de origen a fin que, previa intimación en los términos del art. 4.3.2., evalúe si corresponde tomar la impugnación presentada

Fecha de firma: 27/04/2023

Alta en sistema: 09/05/2023

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#35514070#366328979#20230425155037151



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

extemporáneamente como denuncia de ilegitimidad y sustanciarla de acuerdo con lo previsto en el apartado 6) del inciso e) del artículo 1º de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones tal como lo indica el art. 4.3.1 de la RG 79/98; y 3) sin costas en la Alzada por no haber mediado sustanciación (art. 68 in fine del C.P.C.C.N.). Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.). Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

